

DOCUMENTO SANTA FE II

Una estrategia para América Latina en la década de 1990¹

Reproducción preliminar

Prohibida su divulgación hasta las 10.00 AM del 13 de agosto de 1988

Por el Comité de Santa Fe

Sr. L. Francis Bouchey

Dr. Roger Fontaine

Dr. David C. Jordan, editor

Tte. Gral. Gordon Summer, hijo

INTRODUCCIÓN

LA AMENAZA PARA LAS AMÉRICAS

Las Américas aún son objeto de ataque. Advertimos este peligro en 1980 (1). El ataque se manifiesta en la subversión comunista, el terrorismo y el narcotráfico. La capacidad de lucha de las democracias latinoamericanas para combatir estos ataques ha sido socavada por un estancamiento económico de toda la región, agravado por la deuda. La violencia política y el empeoramiento de la pobreza resultante, han producido una creciente crisis de emigración tanto dentro de la región como procedente de esta. A pesar de los esfuerzos iniciales del gobierno de Reagan para hacer frente a estos problemas y sus causas fundamentales, la situación, lejos de mejorar, se ha vuelto más grave, en el momento en que EEUU se encamina hacia la última década del Siglo XX. Gran parte de la falta de progreso puede atribuirse al hecho de que no se ha llegado a un acuerdo bipartidario que aborde los problemas de América Latina con un enfoque coherente y eficaz. (2)

Problemas en el horizonte

La red comunista subversiva y terrorista se extiende desde Chiapas en la parte sur de México hasta Chile, haciendo toda la costa del Pacífico, al sur del Río Grande, un escenario de conflicto abierto. Es evidente que la estrategia de conflicto comunista para la región es obtener el poder, o por lo menos, involucrar a las fuerzas de seguridad occidentales en prolongadas operaciones simultáneamente en varios países.

¹ **Difundido por:** Proyecto Emancipación
emancipa@sinectis.com.ar - www.emancipacion.org

La magnitud de esta operación tiene la implicación estratégica de reducir los compromisos futuros de EEUU en el continente euroasiático y aumentar así la capacidad de coerción soviética. Esto es real, incluso si se produce una reducción de las fuerzas nucleares estratégicas soviéticas, debido a los acuerdos sobre control de armamentos. Al mismo tiempo, la estrategia de conflictos soviética extiende las posibilidades de EEUU para enfrentar sus responsabilidades mundiales.

Esta amenaza terrorista subversiva no disminuyó, sino creció en la pasada década. Nicaragua y Cuba, Estados satélites de la Unión Soviética en el Hemisferio, se han involucrado en el narcotráfico y establecido relaciones posiblemente dominantes y de cooperación con la mafia que se dedica a las drogas en Colombia. Los vastos recursos que produce el narcotráfico han aumentado la capacidad de la amenaza subversiva, más allá de lo que se concibió inicialmente. La posibilidad de tener que involucrar las fuerzas militares norteamericanas para combatir está públicamente expuesta ante comités del Congreso.

Al mismo tiempo, las economías latinoamericanas se tambalean con tasas de crecimiento sólo marginalmente positivas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) en su informe preliminar de 1987, señala que en términos per cápita, el PBI global de la región aumentó sólo en un 0,5 por ciento de 1987, comparado con el todavía bajo aumento del 1,4 por ciento de 1986. El informe concluye que estas cifras significan que "el deterioro de las condiciones de vida sufrido por la mayoría de las economías latinoamericanas relativamente más pobres, continuó en 1987". Además, ha habido una aceleración en la tasa de inflación. Al frente se encuentra Nicaragua, con un 1.226 por ciento; Brasil, 338 por ciento; Argentina, 178 por ciento y México, 144 por ciento. Lo más preocupante es la alta tasa de inflación entre las tres naciones latinoamericanas más grandes, que también tienen la deuda más alta. Cuando se recuerda que la deuda externa total aumentó en más del 4 por ciento de 1986, parece real que el problema del servicio de la deuda se volverá más oneroso en la década que se avecina.

La mayoría de los norteamericanos ven la emigración latinoamericana como un problema de inmigración de EEUU. Es visto fundamentalmente en el sentido de cómo absorber o rechazar los millones de personas desplazadas que se dirigen hacia EEUU. La respuesta inicial y probablemente la primera de muchas, fue la ley Simpson-Rodino. La misma aspira a aceptar a inmigrantes ilegales que puedan probar que comenzaron a vivir en EEUU antes de 1982 y rechazar las migraciones posteriores mediante la imposición de multas a empleadores que con conocimiento hayan contratado a inmigrantes ilegales desde que la ley se aprobó el 6 de noviembre de 1986. Sin embargo, el problema no es simplemente el atractivo de EEUU para los inmigrantes voluntarios, sino el desplazamiento de millones de personas debido a la violencia marxista, la pobreza, la mala administración gubernamental y el crecimiento de la anarquía y la corrupción generalizadas dentro de la propia América Latina. La fuente de este problema yace en las presiones que produce la emigración.

Si las tendencias actuales continúan, es virtualmente seguro que nos enfrentaremos a:

- Mayores actitudes hostiles latinoamericanas;
- Más Estados pro soviéticos;
- Más subversión;
- Mayores amenazas al sistema financiero internacional;
- Más crímenes y narcotráfico impulsado por elementos subversivos;

- Más olas de inmigración; y por último,
- Mayor probabilidad de participación militar norteamericana.

Lo que observamos es una continuación de la actitud de indiferencia estratégica advertida por este comité en el primer informe, realizado en 1980. A menos que EEUU enfrente los problemas de la región de una forma coherente, seria y bipartidaria, no existen perspectivas de cambiar estas tendencias. El costo de hacer frente a cada uno de los síntomas ya se ha elevado súbitamente, y el precio que quizás EEUU está obligado a pagar sobrepasará cualquiera que hayamos pagado en nuestros 200 años de historia.

La necesidad de democracia

Al parecer, el mayor éxito del gobierno de Reagan en América Latina fue el retorno a la democracia. Este logro, no obstante su apoyo bipartidario, puede ser más frágil de lo que se piensa en la actualidad. Debe prestarse atención a las vulnerabilidades del régimen democrático.

Nuestro concepto del régimen comprende tanto el gobierno temporal como el permanente. En una democracia, el gobierno temporal es el funcionario electo. El gobierno permanente lo constituyen las burocracias y estructuras institucionales que no cambian como resultado de las elecciones, por ejemplo, las fuerzas armadas, el poder judicial y la burocracia civil. Para que la sociedad se mantenga democrática, esta debe exigir al régimen responsabilidad. Ello requiere una comprensión de la verdadera naturaleza del estatismo.

El estatismo ocurre cuando la sociedad está perdiendo o ha perdido la capacidad para exigir responsabilidad al régimen. En América Latina, el estatismo es un problema profundo y persistente. Tocqueville reconoció esta persistencia del estatismo en Francia, a pesar de la Revolución. Señaló que el *ancien regime* (*) aún se aferraba al poder incluso después que la Revolución había reemplazado, al parecer de forma permanente, al gobierno monárquico por la Asamblea Constituyente. El mismo escribió:

"No debemos continuar maravillándonos de ver con qué asombrosa facilidad se restableció la centralización en Francia a principios de este siglo. Los hombres del '89 destruyeron el edificio pero se mantuvieron los cimientos, incluso en las mentes de sus destructores y sobre esos cimientos, pudieron construir uno nuevo de repente, y más sólido de lo que se había fabricado nunca antes".

La actitud arraigada de muchos pueblos latinoamericanos es de tal naturaleza, que aun cuando las formas gubernamentales pueden cambiar el régimen, es decir, el gobierno permanente o temporal del momento, aún produce estatismo. Los gobiernos pueden ser inestables y cambiar, pero todos tienden a abogar por la extensión del papel del régimen durante su mandato. Los amplios y absorbentes poderes del régimen continúan en todo país donde esta perspectiva domine la cultura política.

Si un gobierno electo no está acompañado por un cambio de régimen y un cambio en la cultura política, entonces EEUU y América Latina se separarán aún más. No debe ser una sorpresa, como aparentemente lo es, que la Unión Soviética haya recibido una cálida acogida por parte de los gobernantes recientemente electos. Sin embargo, es sorprendente que gran cantidad de informes periodísticos de EEUU señalen el

incremento de contactos soviéticos con gobernantes latinoamericanos recién electos. Los logros soviéticos incluyen la firma de convenios de cooperación económica e intercambio cultural con Brasil y Uruguay en 1987, realizada por el ministro de Relaciones Exteriores, Eduard Shevardnadze; arreglos de la Unión Soviética con Perú, en torno a la deuda, donde Moscú acordó comprar 80 barcos pesqueros y comerciales de los astilleros navales de Perú, como parte de un plan de reducción de la deuda; y el primer acuerdo pesquero importante de Moscú con Argentina en 1986.

No es irónico que los esfuerzos soviéticos por fomentar vínculos con esas naciones latinoamericanas deban haber sido ayudados por la nueva ola de gobiernos electos que se han extendido por la región. Esto no es simplemente el resultado de los esfuerzos de los gobernantes por distanciarse de los gobiernos militares que ellos reemplazaron, que en muchos casos también habían cooperado con los soviéticos. Ni fue simplemente un esfuerzo por aplacar a los izquierdistas pro soviéticos del país o una respuesta natural a una táctica soviética diferente hacia los Estados del Tercer Mundo.

Todos estos son factores, pero lo más importante es que el régimen latinoamericano es estadista por hábito, aun cuando esté dirigido por representantes electos democráticamente. El régimen *dirigista* se sustituye a sí mismo cada vez más por iniciativa del ciudadano y reduce constantemente la esfera autónoma de la sociedad civil. El régimen soviético es más compatible con el estatismo latinoamericano que EEUU. En muchos casos es así aún cuando el régimen latinoamericano sea ostensiblemente democrático. El aumento de las becas soviéticas para estudiantes latinoamericanos es una muestra del reconocimiento de Moscú de que la educación y el adiestramiento soviéticos en los ministerios del Estado soviético es adecuado para la penetración del régimen estadista latinoamericano. En 1978, Moscú ofreció 2900 becas; una década después, el total se triplicó hasta 10000 aproximadamente. El deseo de los soviéticos de comerciar a través del trueque y de crear amplios proyectos del sector público, se ajusta a las mentalidades estadistas de las culturas soviéticas y latinoamericanas.

Además, la buena voluntad de Moscú de comprar computadoras y software a Brasil, la está abriendo al país más rico de América Latina. Por otra parte, esto coincide con ofertas para establecer empresas conjuntas de ferro manganeso, por ejemplo, y vender vehículos de lanzamiento para promover el programa espacial de Brasil. A su vez, estas medidas presionan a Argentina a cooperar más con los soviéticos, particularmente porque Moscú continúa preocupándose por el desequilibrio comercial resultante de sus masivas compras de granos argentinos.

Sin embargo, el problema fundamental es cultural -la lucha en torno a cuál es la naturaleza del mejor régimen. Por lo tanto, la cuestión no es sólo sobre las formas y procesos de los gobernantes electos. El hecho de centrarse en los procesos eleccionarios opaca los demás requerimientos esenciales para la responsabilidad democrática. Existe una tendencia para los que abogan por la democracia en EEUU de hacer énfasis en las elecciones con exclusión de los demás requisitos. Por ejemplo, el estatismo es a menudo visto simplemente como una forma de bienestar. Lo que no se entiende es que el régimen estadista en América Latina socava la independencia de la sociedad como una sociedad activa y con confianza en sí misma que pueda y haga que sus representantes rindan cuentas de su responsabilidad. El régimen democrático es aquel en el cual el gobierno tiene la responsabilidad de preservar la sociedad existente de ataques externos o intromisión por parte del aparato estatal permanente.

Estados Unidos es resurgente. Hemos rescatado el orgullo y las intenciones que perseguíamos cuando construimos este país y que lo convirtieron en el gran poder que es en la actualidad. Pero con el gran poder surgen grandes responsabilidades y EEUU no puede darse el lujo de seguir actuando con torpeza. En la Unión Soviética hacemos

frente a un adversario que no se enfrenta al mismo tipo de responsabilidad que nuestro gobierno; la estructura de poder en Moscú permite al Buró Político dirigir una política exterior eficaz, concertada y de largo alcance. Los estrategas políticos norteamericanos tienen que enfrentarse al hecho de que los intereses soviéticos son opuestos a los nuestros, no sólo en términos geopolíticos sino porque los valores e ideología que promueven son fundamentalmente antagónicos a la libertad y a la democracia del régimen. Los estrategas políticos norteamericanos tienen que estar en condiciones de reconocer la amenaza de los soviéticos y luego contrarrestarla. Esto significa que las políticas y programas específicos y objetivos tienen que ser coordinados con los propósitos e intereses nacionales norteamericanos a largo plazo y que esos intereses y propósitos se mantengan rigurosamente en el centro de la atención.

Además de tener que enfrentar la amenaza soviética, las naciones latinoamericanas también tienen muchos problemas internos y estructurales. Estados Unidos debe ayudar a estos países a ayudarse a sí mismos, garantizando que cualquier esfuerzo genuino por promover la democracia sea premiado. No podemos permitir que sean esclavizados por narcotraficantes, terroristas o un Estado expansivo, de la misma forma que no podemos permitir que se expanda la tiranía imperial de los soviéticos. No podemos ser espectadores pasivos de que el esfuerzo por eliminar la pobreza sea socavado por políticas económicas o contra la deuda de miras estrechas que destruyen nuestra economía. Los estrategas políticos norteamericanos deben hacer llegar el mensaje de forma categórica y clara: el buen vecino está de regreso y se va a quedar.

PRIMERA PARTE

UNA ESTRATEGIA PARA EL REGIMEN DEMOCRÁTICO

Bases para una política democrática

Los norteamericanos han tendido a creer que las elecciones democráticas son suficientes para establecer actitudes democráticas en el gobierno permanente y promover una mejoría en las relaciones entre EEUU y América Latina. Sin embargo, es convincente el hecho de que aun cuando se hayan instalado formas democráticas en América Latina, el patrón del estatismo no ha sido alterado. De hecho, EEUU se enfrenta a dificultades crecientes para conducir sus relaciones políticas, económicas y diplomáticas con muchas de estas democracias, al tiempo que es testigo también del aumento de la influencia y la visibilidad soviéticas.

Los soviéticos hacen una clara diferenciación entre estar en el gobierno y estar en el poder. Esta diferenciación significa abordar cuál es la esencia del régimen; es decir, si la forma gubernamental está acorde con la estructura gubernamental permanente. Esta diferenciación, por ejemplo, explica la razón por la cual para los soviéticos, los comunistas locales del gobierno no tienen poder hasta que tienen el control de las

fuerzas armadas. Estados Unidos necesita ser tan realista como ellos. Estados Unidos debe procurar una cultura prodemocrática en el gobierno permanente, al igual que en el temporal.

El régimen democrático requiere que el mecanismo político permanente, es decir, las estructuras burocráticas para mantener el orden y administrar la justicia, así como el gobierno temporal, es decir, el gobierno electo, sirvan a los intereses de la sociedad. El régimen democrático tiene el objetivo de preservar la independencia de la sociedad, convertir la sociedad en una comunidad más verdadera y rendir cuentas de su responsabilidad ante la sociedad.

Los elementos más significativos de este objetivo de la política de los EEUU incluyen que los gobernantes latinoamericanos acepten verificación del poder político y mantengan una diferenciación entre el régimen y la sociedad. La tendencia en EEUU es hacer centro excesivo en los procesos electorales. Con lo importante que es esto, existe un entendimiento limitado en cuanto al problema del establecimiento de un régimen democrático y constitucional funcional en Latinoamérica.

Haití brinda un ejemplo dramático. Los funcionarios norteamericanos después de la huida de la familia Duvalier estaban ansiosos por establecer una democracia, o que significaba efectuar elecciones. Resultado: el sangriento fracaso del pasado noviembre, que demostró que Haití -tanto la sociedad como el régimen- no estaba preparado en lo absoluto para un gobierno democrático. Este estrecho enfoque demuestra que los funcionarios norteamericanos no han entendido el profundo conflicto cultural que está teniendo lugar en los países latinoamericanos. Aun cuando se celebren elecciones, el propio régimen podría seguir siendo profundamente estadista y aún se seguiría moviendo inexorablemente hacia un poder absolutista en una sociedad sostenidamente debilitada. (3)

En este sentido político, el estatismo incluye estatismo y nacionalismo integral. Existen tendencias hacia el control centralizado de la actividad económica y la no clara distinción entre la sociedad y régimen. Si los que son electos para el gobierno mantienen puntos de vista estadistas del régimen, entonces el proceso hacia el estatismo y de ahí hacia un régimen antidemocrático, no podrá ser reversible con las elecciones.

La ofensiva cultural marxista

El importante e innovador teórico marxista que reconoció la relación de los valores que la gente observa en la creación del régimen estadista fue Antonio Gramsci (1881-1937). Gramsci afirmaba que la cultura o el conjunto de valores de la sociedad mantienen primacía sobre la economía. Según Gramsci, los trabajadores no conquistarían el régimen democrático, pero los intelectuales sí. Para Gramsci, la mayoría de los hombres tiene los valores comunes de su sociedad, pero no están consientes de por qué sostienen sus puntos de vista o de cómo los adquirieron en primera instancia. De este análisis se desprendía que era posible controlar o dar forma al régimen a través del proceso democrático si los marxistas podían crear los valores comunes dominantes de la nación. Los métodos marxistas y los intelectuales marxistas podían lograrlo mediante la dominación de la cultura de la nación, un proceso que requería una fuerte influencia en su religión, escuelas, medios de difusión masiva y universidades. Para los teóricos marxistas, el método más prometedor para crear un régimen estadista en un ambiente democrático era a través de la conquista de la

cultura de la nación. Conforme a este patrón, los movimientos marxistas en América Latina han sido encabezados por intelectuales y estudiantes y no por trabajadores.

Es en este contexto que debe entenderse la Teología de la Liberación: es una doctrina política disfrazada de creencia religiosa con un significado antilibreempresa y antipapal, para debilitar la independencia de la sociedad del control estadista. Es un retroceso al galicanismo del Siglo XVII donde los reyes que gobernaban según los derechos divinos, trataban de subordinar a la Iglesia tradicionalmente independiente. Así vemos la innovación de la doctrina marxista vinculada a un viejo fenómeno religioso y cultural.

El ataque no abarca solamente uno o dos componentes de la cultura. Es efectivo en un amplio frente que trata de redefinir toda la cultura en una nueva terminología, de manera que, de la misma forma que el catolicismo es redefinido por los teólogos de la liberación, se transforma el arte, los libros son reinterpretados y los curriculums son reacondicionados. El impulso de la penetración cultural en América Latina es seguido por diferentes teóricos educacionales marxistas en escuelas y universidades. El control del Estado sobre la educación está aumentando a través de los libros de texto y manuales y las burocracias educacionales exigen más. Un ejemplo típico fue expresado verbalmente en el gobierno de Lázaro Cárdenas en México, en la década de 1930. González Vázquez Vela, ministro de educación del gobierno de Cárdenas afirmó que el "materialismo dialéctico era la base filosófica de la educación mexicana".

El predominio de la izquierda en gran parte de los medios de difusión en toda América Latina, también debe entenderse en este contexto. Ningunas elecciones democráticas pueden modificar la continua inclinación hacia el régimen estatista, si la "industria de elevación de la conciencia" está en manos de intelectuales estatistas. Los medios de difusión, las iglesias y las escuelas continuarán desviando las formas democráticas hacia el estatismo si EEUU y los nuevos gobiernos democráticos no reconocen esto como una lucha del régimen. La cultura social y el régimen deben estar concebidos para proteger una sociedad democrática.

Una respuesta institucional

Propuesta N° 1

Estados Unidos no puede interesarse sólo por procesos democráticos formales, sino que debe establecer programas para apoyar la democracia entre la burocracia permanente, incluidas las Fuerzas Armadas y la cultura política.

Propuesta N° 2

Estados Unidos debe reconocer la necesidad de la existencia de gobiernos que traten de crear regímenes democráticos para refrenar a partidos antidemocráticos.

El hecho de centrar la atención en el régimen democrático requerirá ir más allá de la forma de democracia (es decir, las elecciones) y proporcionar, cuando sea posible, los medios para fortalecer las instituciones democráticas locales, tales como los sindicatos, grupos empresariales independientes, asociaciones comerciales y organizaciones educacionales. La Alemania poshitleriana brinda un ejemplo instructivo. Sólo mediante el fortalecimiento de grupos autónomos como los grupos empresariales de México o la

prensa independiente de Perú, la sociedad puede desarrollar la voluntad democrática para vencer el autoritarismo estadista.

Los estrategas políticos norteamericanos no deben dejar de la mano los intereses de los gobernantes políticos relacionados con la puesta en práctica de la democracia en sus países respectivos. Lo que podría no parecer una completa democratización a primera vista, podría probar ser en realidad una respuesta precisa a las necesidades particulares de un país. A las democracias latinoamericanas se les debe dar la oportunidad de desarrollar sus instituciones políticas hasta el punto en que sea discernible alguna medida de estabilidad. Para que esto se cumpla cuanto antes se deben disminuir, cuanto sea posible, las fuerzas opuestas al desarrollo. Esta propuesta no es sólo importante porque apoya el derecho de los regímenes latinoamericanos a establecer los límites constitucionales del quehacer político democrático, sino también porque reafirma el apoyo de EEUU a la autonomía latinoamericana.

De acuerdo con nuestro respaldo a la autodeterminación latinoamericana, debemos aceptar el hecho de que en la mayoría de los regímenes latinoamericanos va a haber una mayor concentración de poder en la rama ejecutiva y no en la legislativa. La proclividad latinoamericana de maniobrar en torno a la legislatura por decreto ejecutivo tiene una larga historia y en países como México y Perú, esto significa que el verdadero control del poder de la rama ejecutiva proviene del aparato partidista o del electorado. El elemento importante lo constituye el hecho de si el régimen rinde cuenta de su responsabilidad al pueblo o no.

Propuesta N° 3

Estados Unidos debe fortalecer su capacidad para cultivar valores de un régimen democrático con las fuerzas armadas de la región. Con esta comprensión, no se reduciría el programa de Entrenamiento y Educación Militares internacionales (IMET) por razones tales como la imposibilidad de pago de las deudas a la AID.

Propuesta N° 4

Estados Unidos debería aumentar el presupuesto de la USIA (Agencia de Información de Estados Unidos) y fortalecer la Oficina de Diplomacia Pública.

En la lucha por mantener los pasos que están siendo dados por América Latina para lograr un régimen democrático, Estados Unidos tiene que mantener y desarrollar programas que cultiven los valores democráticos dentro del gobierno permanente. En este sentido, el programa IMET es de extraordinario valor en cuanto a dar forma al régimen democrático, haciendo que los militares norteamericanos compartan sus conocimientos sobre la democracia. El impacto de este programa, por tanto, no puede verse exclusivamente en términos de sus beneficios militares, sino también en cuanto a su contribución a los esfuerzos por la democratización. La vinculación del programa con otros programas norteamericanos es contraproducente porque impide el desarrollo de la iniciativa.

En lugar de perjudicar los diferentes programas de esta manera, los formuladores de política de Estados Unidos deberían reconocer el potencial dinámico que tienen estos tipos de programas para producir un impacto en las apreciaciones institucionales y sociales de los regímenes latinoamericanos. El desarrollo de una política cultural es

decisivo para el apoyo de EEUU a la gestión latinoamericana encaminada a mejorar la cultura democrática. El esfuerzo gramsciano por socavar y destruir la tradición democrática mediante la subversión o corrupción de las instituciones que contienen o mantienen esa tradición debe ser combatido. El aumento del presupuesto de la USIA con este problema particular en mente, debe tener la prioridad número uno. La USIA es nuestra agencia para llevar a cabo la guerra cultural.

Propuesta N° 5

Para promover realmente los derechos humanos, EEUU debería ayudar a fortalecer los sistemas judiciales en la región. También debería diferenciar entre los grupos de los derechos humanos que apoyan al régimen democrático y los que apoyan al estatismo.

Los derechos humanos sólo pueden comprenderse correctamente como el derecho de los hombres a hacer que los sistemas de justicia estatal sean responsables. Un sistema ineficaz, atrasado tecnológicamente y con personal insuficiente no es responsable jurídicamente. La marcha del progreso en América Latina hacia el régimen democrático será cuando el sistema estatal de justicia -tanto los tribunales como la policía- sean debidamente financiados y rindan cuenta ante funcionarios responsables. EEUU debería estar ayudando a ese proceso directamente en una escala mayor que la actual. En vez de cegarse ante las diferencias entre los grupos de los derechos humanos que apoyan al régimen democrático y los que, al estilo de Gramsci, apoyan el estatismo, los formuladores de políticas de EEUU tienen que desarrollar su comprensión de la raíz del problema y atacarla, en vez de atacar los síntomas.

SEGUNDA PARTE

ESTRATEGIA ECONÓMICA

La política económica de EEUU debe estar relacionada con nuestro apoyo al régimen democrático. Ese régimen requiere un saludable sistema económico independiente del control e interferencia excesivos por parte del gobierno. El desarrollo de un mercado de capital nacional autónomo y privado es indispensable para mantener a la sociedad independiente. Una de las mayores decepciones de la era Reagan fue el no utilizar la crisis de endeudamiento para crear mercados de capital saludables como recomendó este comité en 1980. Cuando el problema de la deuda devino en una crisis en 1982, el foco principal estaba en mantener la solvencia de los acreedores y la liquidez de los deudores. Aunque ese objetivo escasamente se ha cumplido, la posibilidad de que las sociedades latinoamericanas evolucionaran hacia el capitalismo democrático -es decir, sistemas de libre empresa y mercados de capital nacionales que mantengan sociedades independientes- en gran medida se había perdido. Aún no es demasiado tarde para lograrlo. La actual crisis de endeudamiento debería ser utilizada para hacer avanzar el proceso de transición de América Latina, de gobiernos democráticos a regímenes democráticos.

Ajuste de la deuda

Aunque resulta una medida progresista la reducción de las cargas de la deuda sobre los Estados latinoamericanos mediante innovaciones tales como el Plan Baker, los cambios de la deuda por capital, el plan mexicano, la reestructuración y otras por el estrilo, la política que tiene que ver con el endeudamiento, también debería incluir medidas mediante las cuales la gestión de la deuda apoye la creación de mercados de capital nacionales. Es probable que ninguna propuesta específica sea definitiva, pero una forma de acercarse a este objetivo podría ser algo que tuviera que ver con la reventa de la deuda en el mercado nacional. Un modelo de esto es el exitoso financiamiento de la deuda interna de EEUU por Alexander Hamilton durante la fundación de dicho país.

Propuesta N° 1

El Departamento del Tesoro de EEUU deberá desempeñar un papel predominante en la formulación de una solución de la crisis de endeudamiento estructural que afecta a muchos de nuestros vecinos latinoamericanos. La solución de la crisis debe partir del reconocimiento de que la actual carga de endeudamiento tiene que ser reducida porque jamás podrá ser reembolsada en las condiciones actuales. Se encuentran disponibles un número de variantes del Plan Morgan/Tesorería/México, de diciembre de 1987.

Finalmente se ha reconocido que la crisis de endeudamiento es estructural. La deuda de algunos países está por encima de su capacidad de reembolso. Los países menos desarrollados (PMD) en su conjunto, deben por lo menos 450 mil millones de dólares y si a esa cantidad se aplican las actuales tasas de interés, los países deudores pagarían

en interés solamente un billón ochocientos mil millones de dólares (1.800.000.000.000) en los próximos veinte años sin reducir el principal de su deuda en un centavo! Sin embargo, el sólo hecho de mantener dichos niveles de pagos de interés tendrá efectos devastadores sobre sus economías y la nuestra. Los países deudores tendrán un crecimiento negativo o de cero, lo que dará lugar a un aumento en los niveles de pobreza, y no tendrán dinero para adquirir los productos de EEUU. Se estima que desde 1982, el deterioro de las economías latinoamericanas provocado por la deuda, ha costado a los productores de EEUU 70 mil millones de dólares en ventas perdidas.

Propuesta N° 2

Los cambios de deuda por capital están demostrando ser un vehículo efectivo para que las naciones latinoamericanas deudoras reduzcan la deuda externa a descuento, deberían ser promovidos enérgicamente como medio de estimular el crecimiento del sector productivo privado.

Los cambios de deuda por capital permiten que los inversionistas nacionales o extranjeros (poseedores de dólares) compren deuda externa a descuento a los acreedores y luego intercambien el papel moneda en valor nominal por moneda local. Así, por ejemplo, un inversionista puede comprar un préstamo de cincuenta millones de dólares a un banco norteamericano por 25 millones de dólares y el banco del país deudor le da en pesos por valor de 50 millones de dólares a condición de que los pesos cambiados por la deuda sean empleados en una empresa productiva. Sin embargo, deberá tenerse el cuidado de estimular a los residentes locales a participar en los cambios y empresas conjuntas basadas en este tipo de cambio, para no provocar un negativo nacionalismo en lugares donde ha habido una tradición de hostilidad hacia la inversión extranjera.

Capitalismo de Estado frente a empresa privada

Propuesta N° 3

Las estrategias inversionistas y la política comercial de EEUU deberían realizarse con la idea de ayudar a la formación de mercados de capital nacionales en naciones individuales de América Latina. Por ejemplo, las ganancias comerciales podrían utilizarse en parte para fortalecer los mercados de capital internos y los inversionistas podrían estar dispuestos a aceptar algunos instrumentos de endeudamiento en sus convenios de empresa conjunta si también son coordinadas estrategias de ayuda pública de EEUU y otras para desarrollar un mercado de capital privado nacional en naciones latinoamericanas.

Propuesta N° 4

EEUU debería estimular tanto a través de programas públicos como privados el desarrollo de la empresa privada en América Latina y hacer intentos por acelerar la privatización de las industrias paraestatales.

Básicamente existen solamente dos tipos de sistemas económicos, el capitalismo de Estado y el capitalismo privado. Lo que necesita América Latina es empleos y producción. Sólo el capitalismo democrático puede proporcionar la producción masiva al menor costo unitario para el consumidor. La privatización de empresas paraestatales antieconómicas ha demostrado ser un éxito en Costa Rica, donde el gobierno ha transferido cuarenta y una o cuarenta y dos entidades gubernamentales que perdieron más de cincuenta millones de dólares en una década y sólo proporcionaron 2200 empleos. Estas firmas gubernamentales fueron vendidas a precios descendentes a acreedores extranjeros mediante el sistema de cambio de deuda por capital -con lo que se redujo la deuda externa de Costa Rica- o mediante la utilización de fondos de la LP 480 para adquirir las acciones del gobierno.

La privatización y la promoción del sector privado hicieron posible que los costarricenses concentraran sus esfuerzos en nuevos productos orientados hacia la exportación, tales como piña, macadamia (*), mangos, otros cítricos y productos de la industria ligera. El desplazamiento del café, el algodón, el ganado y el banano como rubros de exportación, hizo que los costarricenses pudieran aumentar sus exportaciones no tradicionales de trescientos millones de dólares de 1986, a 500 millones en 1987, un aumento del 66 por ciento en un año. Esto constituyó un logro notable para el sector privado.

Iniciativas económicas y ecológicas

Propuesta N° 5

La Iniciativa para la Cuenca del Caribe necesita ser revitalizada, ampliada y extendida durante unos doce años adicionales, hasta 2007.

La Iniciativa para la Cuenca del Caribe ha sido un éxito relativo, aun cuando las inversiones privadas directas de Estados Unidos todavía no han alcanzado el nivel esperado inicialmente, debido en gran medida a la confusión inicial. La Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) y la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC) pueden revitalizar la iniciativa mediante un programa de promoción de inversiones ampliado, que trate de identificar las oportunidades para inversionistas eventuales, al dar un énfasis particular a las posibilidades de empresa mixta en EEUU y los ciudadanos del país anfitrión.

La variedad de productos que se permitió incorporar en el mercado libre de impuestos de EEUU debería ser ampliada para incluir una variada gama de productos confeccionados a partir de tejidos y otros materiales norteamericanos.

Propuesta N° 6

La política comercial agrícola de EEUU con países latinoamericanos y los programas de asistencia norteamericana a los sectores agrícolas de dichos países deben presionar para elevar al máximo las ventajas comparativas y estimular la transferencia hacia la producción de cultivos para liquidación corriente, a fin de aumentar el comercio recíproco.

Los mercados norteamericanos de vegetales y frutas frescas de invierno son los ejemplos más obvios de donde una reducción de las barreras de importación a los mercados norteamericanos para los productos latinoamericanos ha aprovechado las ventajas de producción comparativas para beneficio mutuo.

El terreno, el clima y el costo relativo de mano de obra y tecnología brindan a EEUU una ventaja en costos de producción de cereales y frijoles frente a México, Centroamérica y el Caribe. De manera similar, la Cuenca del Caribe posee ventajas en la producción de frutas, vegetales y azúcar. Sin embargo, el maíz y los frijoles son elementos básicos en la dieta de muchos de estos países. Los agricultores pequeños de Guatemala o Costa Rica pueden recibir mayores ganancias mediante la producción de cultivos para la liquidación corriente, tales como melones, espárragos, frambuesas, etc., para la venta a EEUU y la compra de maíz importado de dicho país.

Conscientes de la realidad económica de las ventajas comparativas, la agricultura chilena se encuentra en la vanguardia en cuanto a la ampliación de la producción de cultivos especiales para la exportación, mayormente hacia el Oriente, Europa y EEUU. Las frutas, los vegetales y otros cultivos especiales que usualmente requieren gran intensidad de trabajo y emplean a los *más pobres entre los pobres* en áreas rurales menos desarrolladas, lo que también impide a los campesinos integrarse a las filas de los desempleos urbanos.

Debido al enorme éxito de la *Revolución Verde* encabezada por los programas de terreno de la AID e investigativos de la Rockefeller Foundation, la producción de cultivos de granos vitales ahora requiere una fuerza de trabajo sumamente reducida. Esto permite el redesplazamiento de los trabajadores hacia nuevos y rentables esfuerzos agrícolas.

Propuesta N° 7

El azúcar centroamericana y caribeña deberá recibir un acceso mucho mayor a los mercados norteamericanos mediante la desaparición progresiva del sistema actual de cuota proteccionista. Esto ahorrará dinero a los consumidores norteamericanos y estimulará las economías de nuestros vecinos.

Los consumidores norteamericanos ahora pagan hasta siete veces el precio del azúcar en el mercado mundial, porque las actuales leyes de EEUU establecen para el azúcar un mercado no competitivo y de casi paridad entre precios de oferta y de demanda; así como fijan precios a niveles artificialmente altos para beneficio de 12000 productores azucareros internos solamente. Esta situación se ha empeorado durante los últimos ocho años. Es un total desatino el hecho de que al mismo tiempo que nuestro gobierno ha estado aumentando la ayuda económica a esa región ha cerrado más nuestro mercado a uno de los productos de exportación más importante de la región.

Propuesta

N

° 8

EEUU, trabajando dentro del marco de la OEA y en cooperación con grupos privados que trabajan en cuestiones relacionadas con el medio ambiente, debería hacer todo lo

posible por proteger los restantes bosques tropicales y devolver el equilibrio ecológico a las áreas denudadas y deforestadas.

Vastas extensiones de bosques tropicales han sido destruidas en el último decenio creando así un área de terreno baldío en Centroamérica, el Caribe (especialmente Haití), la Cuenca del Amazonas y Panamá. Una vez despejadas, han tenido lugar la erosión y la destrucción ambiental en vez de las empresas agrícolas productivas. Los esfuerzos interamericanos en la reforestación y, donde sea posible, en hacer que la tierra vuelva a su estado primitivo, deben ser coordinados con programas similares iniciados en 1985 por el Banco Mundial, el Instituto de Recursos Mundiales y las Agencias de las Naciones Unidas. Deberá fundarse la Escuela Agrícola para los Trópicos Húmedos, proyectada en Costa Rica en 1986. La misma capacitará a técnicos para la protección de frágiles bosques tropicales.

Propuesta N° 9

EEUU deberá reconsiderar el Programa de Plantas Gemelas/Industrias Fronterizas con México, a la luz de posibles costos económicos y sociales a largo plazo en ambas repúblicas. Las maquiladoras a lo largo de la frontera mexicano-norteamericana, han proporcionado empleo a cientos de miles de mexicanos. Sin embargo, no está claro si ha existido beneficio correspondiente para los trabajadores norteamericanos. Además, los millones de mexicanos que han sido atraídos hacia el norte, y cuyas aspiraciones no han sido satisfechas, tienden a llegar a EEUU a través de la frontera; lo que acelera aún más la inmigración ilegal.

Muchos de los mexicanos que cruzan la frontera México-norteamericana son hombres que por lo general no pueden obtener empleo en las maquiladoras, ya que las principales habilidades manuales y el trabajo a destajo son mejor desempeñados por las mujeres. Este empleo excesivo de mujeres ha tendido a debilitar la estructura familiar y a exacerbar las ya pésimas condiciones sociales, ambientales, sanitarias y educacionales en los pueblos fronterizos. De forma adicional, la concentración de nuevas industrias a lo largo de la frontera norteña de México ha desequilibrado aún más el ya irregular desarrollo de dicho país.

Por lo tanto, las industrias norteamericanas deberían considerar el traslado de sus máquinas mucho más hacia el interior de México. Este cambio hacia el sur desde la frontera aumentaría el desarrollo equilibrado de México, promovería las industrias locales, estabilizaría la familia mexicana y ayudaría a resolver algunas de las condiciones sociales y sanitarias estimuladas por el Programa de Industrias Fronterizas. A largo plazo, dicho traslado hacia el interior de México beneficiaría a ambos países.

TERCERA PARTE

ESTRATEGIA PARA TRABAJAR CON LAS INSTITUCIONES PERMANENTES DE LAS NACIONES LATINOAMERICANAS Y FORTALECER LA COOPERACIÓN REGIONAL

Los principales pilares de los gobiernos permanentes de los regímenes latinoamericanos son las fuerzas armadas y el poder judicial. La política hacia un régimen pro-democrático debe reconocer que tanto las instituciones militares como judiciales soportan cargas pesadas al abordar los conflictos de Baja Intensidad (LIC) y los narcóticos mientras se acostumbran a las exigencias democráticas para la responsabilidad ante administraciones temporales. Las iniciativas bilaterales de EEUU en el fortalecimiento de estas instituciones deberán ser apoyadas multilateralmente a través de la OEA.

El problema del Conflicto de Baja Intensidad

Propuesta N° 1

El Congreso de EEUU ha reconocido la creciente amenaza del *conflicto de baja intensidad* para los nacientes regímenes democráticos. El mismo ha ordenado el apoyo de EEUU a las fuerzas armadas de la región que enfrentan este reto. El poder ejecutivo deberá tomar medidas rigurosas para poner en práctica la presente legislación.

Muchos de los regímenes de América Latina están enfrentados a lo que ha sido identificado en Washington como conflicto de Baja Intensidad. Este término crecientemente omnipresente, es utilizado para describir una forma de guerra que incluye las operaciones psicológicas, la desinformación, la información errónea, el terrorismo y la subversión cultural y religiosa. El Congreso de EEUU ha establecido por ley una respuesta razonable a este problema ampliamente conocido. Sin embargo, la rama ejecutiva del gobierno ha sido extremadamente vacilante en la aplicación de la legislación.

En 1986 el Congreso aprobó y el Presidente firmó la Ley de Reorganización del Departamento de Defensa Goldwater-Nichols, de 1986. Esta ley fue aprobada porque el Departamento de Defensa no estaba apoyando adecuadamente las Operaciones Especiales (SO) ni estaba abordando plenamente las consecuencias del conflicto de baja intensidad. Además, fue añadida una enmienda que indicaba a EEUU la creación de un Comando de Operaciones Especiales. Esta ley requería un nuevo subsecretario de Defensa para Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad. Fue creado además un nuevo comando unificado con amplias responsabilidades de adquisición, entrenamiento y promoción, único entre los comandos unificados. Al comando le fue conferido, en virtud de la ley, su propio Programa de Fuerza Importante en el Presupuesto para la Defensa, MDF-11. El Congreso deseaba que la planificación respecto a los conflictos de baja intensidad estuviera en pie de igualdad con la planificación estratégica global. Aunque se produjeron fuertes críticas a la ley, el Congreso la ha seguido apoyando. Esta nueva ley deberá brindar un mejor mecanismo para abordar otros problemas decisivos y conexos tales como el terrorismo, el narcotráfico y las operaciones hostiles psicológicas y de inteligencia. Los creadores de

la ley reconocen que EEUU es vulnerable a otras formas de guerra aparte del principal conflicto armado.

Propuesta N° 2

EEUU debe estar preparado para ampliar su programa de asistencia militar a las fuerzas armadas latinoamericanas como parte de su reconocimiento de que las insurgencias indígenas son explotadas y agravadas desde el exterior. La complejidad de este desafío requiere una respuesta global de parte de nuestra sociedad.

Propuesta N° 3

Si las tendencias mantienen su curso actual, EEUU continuará enfrentando la exportación de la revolución desde Nicaragua hasta la década de 1990. Una política de contención no será poco costosa y a lo largo no será funcional. EEUU o bien tendrá que apoyar la democratización de Nicaragua o pagar costos elevadísimos para combatir la subversión de los vecinos de Nicaragua

Propuesta N° 4

Una política de democratización de Nicaragua requerirá un desarrollo sumamente sofisticado de la doctrina del Conflicto de Baja Intensidad. El aspecto más importante de este desarrollo será la educación de los medios de difusión y la opinión pública norteamericana en cuanto a la propensión de los regímenes comunistas nacionales latinoamericanos para subvertir a sus vecinos con el apoyo encubierto de la Unión Soviética.

Propuesta N° 5

La opinión pública y las instituciones privadas de EEUU deben emprender la educación de los medios de difusión y los dirigentes comunitarios, en cuanto a la naturaleza del conflicto marxista leninista según fue adaptada por los nacionalistas a los problemas del subdesarrollo. El casamiento del comunismo con el nacionalismo en América Latina, sin embargo, representa el mayor peligro para la región y para los intereses de los EEUU.

Propuesta N° 6

Con el apoyo bipartidista entre el Congreso y el Poder Ejecutivo de EEUU, los propios latinoamericanos pueden anular la comunización de sus tierras, instalar regímenes democráticos en la región y satisfacer su aspiración de lograr la autodeterminación.

El bloque soviético está proyectando exitosamente su poder en cada país de este Hemisferio y todo parece indicar que estas tendencias continuarán. Es lamentable pero cierto, que las principales potencias económicas del mundo libre democrático no están plenamente comprometidas a apoyar la libertad y la democracia en el Hemisferio occidental. EEUU debe marchar a la cabeza con más recursos para las amenazadas sociedades latinoamericanas. Es imperativo que los militares latinoamericanos se den cuenta de que los gobiernos electos pueden hacer frente a los desafíos de la subversión y el terrorismo.

La Crisis de los Narcóticos

Propuesta N° 7

Para ayudar a las sociedades latinoamericanas a combatir el narcotráfico y el terrorismo, EEUU debe apoyar con asistencia financiera y técnica el desarrollo de un sistema judicial independiente. EEUU necesita dar un ejemplo mediante la reducción también de la demanda interna.

Mediante el apoyo a un poder judicial independiente, EEUU puede ayudar a los países latinoamericanos a hacer frente a los delitos relacionados con los narcóticos y el terrorismo. Si las autoridades judiciales tienen los medios para reaccionar rápida y eficazmente ante estos delitos, pueden evitar que el crecimiento de estos amenace la legitimidad de sus democracias en lucha.

Además, EEUU necesita dar una lección con su propio sistema de aplicación del poder judicial mediante la reducción de la demanda interna. En EEUU la promulgación y compulsión de la ley debe reducir las ganancias para los vendedores y aumentar sustancialmente los riesgos para los compradores. En esta forma, EEUU puede constituir un modelo tanto para la reducción de la demanda como para la aplicación judicial. La posesión debe dar lugar a una sentencia en prisión la declaración de culpabilidad por venta, debe dar lugar a severas penas sin libertad condicional. Después de la creación de un fuerte ambiente de promulgación y compulsión podría explorarse e iniciarse un limitado programa de legalización unido a la rehabilitación y educación.

Renovando la OEA

Propuesta N° 8

EEUU debería conceder mucho más énfasis al trabajo con los miembros de la OEA sobre los problemas compartidos de la seguridad militar (conflictos de baja intensidad), el narcotráfico, la inmigración y la deuda.

Mediante el trabajo con la OEA sobre las propuestas relacionadas con la deuda conjuntamente con el Banco Interamericano para el Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro, EEUU dará muestras de su sensibilidad ante los problemas económicos al contribuir a la emigración de los latinos/inmigración en EEUU.

Los debates relacionados con la OEA usualmente provocan bostezos en el seno del personal de este país que tiene a su cargo la política exterior. No debería ser así. La falta de interés de facto de la Administración de Reagan en esta institución ha sido un grave error. Su promesa de satisfacer plenamente los compromisos financieros para con la organización y su posterior negativa a hacerlo, ha dañado seriamente la confianza de los norteamericanos.

En contraste con las Naciones Unidas, la OEA ha demostrado ser una organización mucho más amistosa. Aun cuando EEUU ha recibido sus castigos allí, especialmente a raíz de la crisis de las Malvinas, que sigue resonando en todo el Hemisferio, hay menos antagonismo y más cooperación en la OEA que en las Naciones Unidas.

Propuesta N° 9

El embajador de EEUU ante la OEA debería estar encargado de coordinar las iniciativas multilaterales de EEUU en las esferas mencionadas más arriba, con los representantes latinoamericanos de la OEA en Washington. Como primera medida, EEUU debe ofrecer a la OEA su contribución, a fin de demostrar que toma en serio dichas responsabilidades.

Propuesta N° 10

La participación de la OEA en asuntos relacionados con la seguridad y el narcotráfico proporciona a EEUU los medios idóneos para librar una guerra cooperativa y exitosa contra los imperios delictivos que amenazan a todo el Hemisferio.

La próxima Administración necesita poner en orden sus prioridades. Nuestra agenda y la de los latinoamericanos no necesariamente son incompatibles. La OEA, debidamente financiada y encaminada por la senda correcta, puede ser útil para nuestros intereses mutuos.

Es de especial interés lograr que se fortalezca aún más el papel de la OEA en la promoción de una mayor cooperación entre sus miembros para combatir el narcotráfico internacional. La Conferencia de Río de Janeiro y el creciente reconocimiento de que el tráfico de drogas constituye un problema para la región, indican la disposición de las naciones miembros a participar en operaciones internacionales conjuntas.

Las operaciones de paz de la OEA en América Central son preferibles en grado sumo a los esfuerzos no alineados u hostiles que serían emprendidos por las Naciones Unidas en esta sensible área. Con la participación de la OEA, los Estados miembros se percatarán mejor de la amenaza externa que enfrenta la región, y la cooperación multinacional contribuirá a la legitimidad y comprensión internacional de los esfuerzos de paz. Por otra parte, un esfuerzo de la OEA requeriría dinero, del que en estos momentos tiene una escasez desesperada.

Evidentemente, la nueva Administración tendrá que tomar una decisión básica respecto a lo que desea obtener de su apoyo a organizaciones internacionales. Dicha decisión determinará el futuro de la OEA. EEUU necesita fomentar la cooperación en todas las cuestiones que afectan a la comunidad del Hemisferio. Siempre que sea posible, EEUU necesita subrayar su adhesión a la cooperación, la autodeterminación y las responsabilidades comunes para enfrentar el narcotráfico, el alivio de la carga de la deuda y las presiones padecidas por las poblaciones latinoamericanas que escapan de la pobreza, el crimen, el terrorismo y la guerra. La OEA es un foro donde EEUU puede lograr que sus puntos de vista se comprendan siempre con claridad en toda la región.

CUARTA PARTE

FUTURAS CRISIS DE REGÍMENES LATINOAMERICANOS Y RESPONSABILIDADES DE ESTADOS UNIDOS

EEUU debe prepararse y prestar especial atención a cinco países que constituyen ejemplos particularmente significativos de las progresivas crisis de regímenes latinoamericanos: México, Colombia, Brasil, Cuba y Panamá.

Una nueva política hacia América Latina para la década de 1990 ha de prestar especial atención a la amenaza genérica que enfrentan las frágiles democracias latinoamericanas y a la difícil transición después de un gobierno autoritario o totalitario. Las cinco naciones analizadas aquí proporcionan ejemplos de los problemas que comparten, hasta cierto punto, la mayoría de los restantes Estados latinoamericanos. Uno de ellos, México, es un régimen autoritario que enfrenta una crisis. Al parecer es incapaz de incorporar un partido o partidos de oposición legítimos. Dos de ellos, Colombia y Brasil, son democracias, y los otros dos, Cuba y Panamá, son regímenes totalitarios y autoritarios decadentes. EEUU tiene que prestarles especial atención como ejemplos de los problemas más generales de la región.

México

Propuesta N° 1

EEUU tiene que encontrar formas y medios para animar a México a aceptar una oposición legítima. Los indicios de oposición al predominio de un partido aumentan. La reforma interna del PRI no será suficiente para frenar el crecimiento de partidos de oposición.

Propuesta N° 2

EEUU debe apoyar cualquier esfuerzo por vender en liquidación empresas de propiedad estatal y desarrollar un mercado interno para enfrentar la deuda externa de la nación.

Propuesta N° 3

Todo el apoyo que EEUU pueda ofrecer para mejorar el sistema judicial de México, corrupto y plagado por el soborno, reviste suma importancia. Sin la realización de mejoras en esta área, la guerra contra los narcóticos continuará siendo una bufonada macabra.

México ha comenzado finalmente a experimentar con reformas en el proceso de selección de candidatos de su partido de gobierno (PRI). En parte como respuesta a la

caída del peso mexicano, ocurrida en 1982, el PRI ha hecho algunos esfuerzos por adaptarse a la opinión pública. Se ha permitido la celebración de elecciones primarias para la nominación de algunos candidatos del PRI. Sin embargo, Cuauhtémoc Cárdenas, descendiente del prominente héroe revolucionario de dicho partido, llegó a la conclusión de que las reformas internas eran ilusorias; se separó del partido y formó una coalición de partidos de izquierda llamada Frente Democrático. A esta nueva oposición de izquierda se une la sufrida oposición de derecha de México, llamada PAN.

Tanto el PAN como el Frente Democrático presentaron fuertes candidaturas, y el PRI, a pesar de su afianzado aparato político y continuado fraude electoral, sólo pudo obtener el 50% de los votos. Cárdenas y Manuel Clouthier, el candidato del PAN, continúan cuestionando la legitimidad de las elecciones, lo que pudiera obligar al PRI a una mayor apertura del proceso político y a instituir algunas reformas reales.

El continuado estatismo del PRI ha dado lugar a un desempleo o subempleo masivo que a su vez da lugar a que una mayor cantidad de personas emigren. Este desempleo estructural, que según se calcula abarca el 40% de su fuerza de trabajo, tiene que ser resuelto mediante la venta en liquidación de las masivas *paraestatales*. Probablemente el 85 por ciento de la economía de México sea de propiedad estatal y el sector privado restante depende de la benevolencia del gobierno. Existe indicio de que hay funcionarios mexicanos que reconocen el problema; es necesario estimularlos.

COLOMBIA

Propuesta N° 4

Además de fortalecer el sistema judicial existente en Colombia, EEUU debe apoyar a los tribunales especiales controlados conjuntamente por el Ministerio del Interior y las fuerzas armadas para enfrentar la doble amenaza de la subversión y el narcotráfico, que representan una guerra abierta contra el régimen democrático.

Propuesta N° 5

Estos tribunales han de estar facultados para juzgar con prontitud y sentenciar a que sean reclusos en centros de detención especiales, bajo el control del ejército, los elementos subversivos y traficantes que operan actualmente contra la soberanía del pueblo colombiano. El problema de El Salvador se repetirá en mayor escala si no se adoptan pronto medidas enérgicas. Oportunamente, el apoyo y financiamiento adecuado de EEUU pueden evitar así levantamientos y una guerra civil de envergadura.

Colombia enfrenta una doble amenaza para su seguridad e instituciones democráticas básicas. Los insurgentes respaldados por los comunistas y cuyo número y esfera de actividad aumentaron durante la década de 1980, representan una de las amenazas. De continuar la actual tendencia, Colombia se habrá convertido en otro El Salvador para mediados de la década de 1990, por no decir antes, pero, a diferencia de esa pequeña nación centroamericana, Colombia también enfrenta otro enemigo: el poderoso y bien afianzado cartel del narcotráfico, cuyo centro de operaciones se encuentra en las ciudades colombianas de Cali y Medellín.

Los narcotraficantes ya han destruido de manera eficaz el sistema legal de Colombia, mediante la intimidación y el soborno masivo del aparato judicial y la policía. Con recursos que pueden llegar a ser de 9 mil millones de dólares anuales, obtenidos a través de la venta de narcóticos ilícitos, fundamentalmente en este país, los señores de la droga fácilmente se pueden dar el lujo de mantener su privilegiada situación. Y para empeorar las cosas, los guerrilleros colombianos y los carteles de la cocaína operan juntos para hacer avanzar sus objetivos en ocasiones contradictorias.

En contraste, el gobierno colombiano ha iniciado, en el mejor de los casos, una campaña poco entusiasta contra estas dos amenazas. Las fuerzas de seguridad están lamentablemente mal dotadas y equipadas. El anterior gobierno del presidente Belisario Betancur redujo radicalmente a la mitad el presupuesto para la defensa en los críticos primeros años de la década de 1980. La administración del presidente Virgilio Barco, más realista, ha restituido esta cantidad sólo parcialmente, y a pesar de algunas medidas adoptadas contra el terrorismo y el tráfico de narcóticos, aún no se ha anunciado un plan de estrategia nacional. Entretanto, el esfuerzo del gobierno por alcanzar la paz a través del diálogo y las negociaciones está en completo desorden. El papel de EEUU no ha sido particularmente útil. Aunque la Administración de Reagan ha presionado enérgicamente para la extradición de conocidos narcotraficantes, recientemente ha reducido el programa norteamericano de asistencia a Colombia en materia de seguridad. Esa decisión fue un grave error, porque ha restado fuerza a los enérgicos términos empleados con relación a la necesidad de que Colombia tomara medidas drásticas contra esta doble amenaza.

Así, si las tendencias actuales no se cambian, en Colombia se producirá una importante rebelión en la década de 1990, rebelión que afecta directamente a EEUU particularmente en lo que se refiere al aumento e la cantidad de narcóticos que como resultado arribará a nuestras costas. Por lo tanto, es posible que en la década de 1990 Colombia haga que América Central, el singular problema de política exterior de EEUU en la década de 1980, parezca bastante pequeña.

Colombia y, en América Central, El Salvador, son ejemplos claves de la necesidad de una reforma judicial. Un elemento necesario con vistas a lograr la estabilidad para estos dos países azotados por la guerra es el restablecimiento del imperio de la ley. El hundimiento del poder judicial en Colombia y El Salvador, constituye una burla al fundador de Colombia, Francisco de Paula Santander, quien expresó: "Las armas nos dieron la independencia, pero las leyes nos darán la libertad".

En El Salvador, los terroristas comunistas y los asesinos derechistas han destruido, mediante la intimidación y el crimen, la capacidad de los tribunales para juzgar y sentenciar a los que violan las leyes. En la década de 1980 los guerrilleros comunistas y los narcotraficantes se las ingenieron para lograr algo similar en Colombia en una escala mucho mayor. Actualmente es casi imposible condenar a cualquier terrorista o narcotraficante en ambos países. Pistoleros de derecha de estos países también han sido dejados en gran parte sin castigo por jueces que o bien viven sumidos en el miedo o han sido sobornados abiertamente tanto por criminales como por rebeldes.

Es muy tarde en Colombia y en El Salvador. Muchos creen que la guerra contra los narcotraficantes ya se ha perdido en Colombia. Sin embargo, EEUU no puede permitirse que esta situación se mantenga eternamente. La próxima Administración tiene que reconsiderar radicalmente sus programas de asistencia jurídica. Una cantidad de dinero mucho mayor debe dedicarse a los tribunales especiales y a su protección - un elemento clave para que estas instituciones lleven a cabo su misión. A menos que lo haga, el debilitamiento de la ley y el orden se propagará por todo el Hemisferio, incluido EEUU.

BRASIL

Propuesta N° 6

EEUU debe dar pasos dirigidos a brindar asistencia a Brasil, por su creciente crisis de endeudamiento antes de que la misma debilite su frágil democracia. Aun cuando se produzca el hundimiento de un gobierno electo en la década de 1990, se debe prestar asistencia a Brasil para guiarlo por una senda de crecimiento económico, a fin de que avance hacia el régimen político que necesita.

En la década de 1990, Brasil enfrentará problemas para equiparar su extensión con su potencial. El gigante sudamericano está inmerso en una difícil transición de retorno a la democracia, luego de más de dos décadas de gobierno militar. Con un estilo típicamente brasileño, el ejército gobernó al país con mano relativamente suave y se mantuvo libre de corrupción durante ese período; pero para mediados de la década de 1980, los brasileños estaban en condiciones, incluso deseosos, de tener un gobierno civil y plenamente democrático.

Sin embargo, la transición no ha sido fácil, y el actual presidente civil, José Sarney, a duras penas pudo evitar un golpe de Estado el pasado mes de marzo, debido a las acciones de un Congreso Nacional cada vez más imprudente e irresponsable, que a la vez actúa como Asamblea Constituyente. Hasta que no recibieron una advertencia definitiva por parte de los militares, los redactores de la nueva Constitución estaban considerando seriamente una forma parlamentaria de gobierno (un experimento similar llevado a cabo a principios de la década de 1960 fracasó lastimosamente) y habían decidido celebrar elecciones directas presidenciales el próximo año -decisión que hubiera garantizado virtualmente una victoria izquierdista en 1989.

Los problemas políticos de Brasil se agravan por sus actuales fracasos económicos. El débil gobierno de Sarney ha exacerbado los problemas que ya eran severos. Brasil tiene la mayor deuda externa de los países subdesarrollados, y en los últimos años no ha podido pagar el principal y los intereses a tiempo. La inflación continúa con un índice de tres dígitos. La masiva intervención del Estado en la economía y los enormes déficit presupuestarios abruma la que debería ser una de las economías más florecientes del mundo. Incluso en el período de los militares, en que se seguían políticas más prudentes, la preferencia se inclinaba hacia el crecimiento a toda costa mientras se posponían las reformas básicas de la economía.

Si un gobierno abiertamente de izquierda asumiera el poder en 1990, los problemas económicos no harán más que aumentar geométricamente en la década siguiente. Antes de que eso ocurra, sin embargo, es probable que la frágil democracia de Brasil sea destruida por otro período de gobierno militar. El ejército lo haría con renuencia, y posiblemente atacaría los problemas económicos sin entusiasmo y los dejaría sin resolver. Pero si se ve obligado, el ejército desempeñaría su papel histórico como poder moderador. Sin embargo, este nuevo ciclo de inestabilidad e inseguridad no acercaría a Brasil a su objetivo de convertirse en un país desarrollado y, de hecho, en una importante potencia para fines de siglo.

La Administración de Reagan ha simpatizado mucho más con las ambiciones brasileñas que su predecesora. La misma ha alentado de buena gana el proceso democrático, al tiempo que divulga moderadamente críticas sobre violación de los derechos humanos (y el programa de energía nuclear de Brasil) en contraste con el período Carter.

Sin embargo, después de un buen comienzo, las relaciones norteamericano-brasileñas, nuevamente han experimentado un descenso. Brasil y, de hecho, toda América del Sur, ha llegado a ocupar un lugar secundario en relación a nuestros problemas en América Central. Han surgido desavenencias en cuestiones concernientes al comercio y las inversiones, especialmente en la muy sensible área de los productos de alta tecnología, los computadores y, en particular, el *software*. Los problemas no son, en modo alguno, responsabilidad exclusiva de los EEUU. Pero para que sean resueltos deben tener una prioridad mayor que la que han tenido en años anteriores. La clave de la diplomacia norteamericana es que su política se lleve a cabo de un modo que anime a Brasil a reestructurar su economía a fin de que favorezca las fuerzas del mercado, tanto en el país como en el exterior.

El mejor vehículo para ello ya está disponible. Creado por Henry Kissinger en 1976, el mismo establece que el secretario de Estado de EEUU y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil se reúnan dos veces cada año. Pero las reuniones por sí solas difícilmente resuelvan los problemas. Es necesario que se evidencie la voluntad política de ambas partes. La próxima Administración debe hacer ese esfuerzo para evitar que en la próxima década las discrepancias económicas sean incluso mucho mayores y más enconadas.

CUBA

Propuesta N° 7

EEUU debe sostener conversaciones de alto nivel con la Unión Soviética, a fin de producir una retirada militar soviética de Cuba.

Propuesta N° 8

Cuando estas conversaciones lleguen a una conclusión, o al menos a una etapa prometedora, EEUU debe iniciar conversaciones con Castro o su sucesor, a fin de prepararse para una Cuba posterior a Castro.

Propuesta N° 9

Teniendo en cuenta que el castrismo está en bancarrota y ha fracasado como modelo de desarrollo y libertad, EEUU debe ampliar sus transmisiones a Cuba por los medios como una vía de educación cívica para crear un régimen democrático. La TV-Martí debe comenzar a funcionar lo antes posible con programas dirigidos a enseñar los elementos de la cultura democrática.

Cuba permanece segura en la órbita de la Unión Soviética y bajo el puño de hierro del envejecido caudillo Fidel Castro. Sin embargo, a finales de siglo, Castro estará próximo

a sus 75 cumpleaños. Por lo tanto, la próxima Administración debe estar preparada para la futura crisis porfirista que bien pudiera ocurrir en Cuba durante su mandato. En el caso del envejecido caudillo de México, Porfirio Díaz, el régimen se derrumbó rápidamente cuando el anciano, desde el punto de vista físico, perdió el control de sí mismo y luego de su país, a principios de este siglo.

Aunque la Administración de Reagan nunca buscó el origen de la descriptiva frase del ex secretario de Estado, Alexander Haig, no se había hecho ilusiones acerca de la naturaleza del régimen de Castro y de su propósito principal, dañar los intereses de EEUU en cualquier momento y lugar que pudiera.

En gran medida debido a presiones de EEUU, los éxitos de Castro declinaron precipitadamente durante la década de 1980.

En El Salvador no se produjo una ostensible y fácil victoria.

Se perdió Granada; los jamaicanos eligieron y reeligieron a un gobierno vehementemente anticastrista. En Angola, las fuerzas cubanas han tenido que enfrentar a las fuerzas guerrilleras cada vez más agresivas y mejor armadas de la UNITA, de Jonas Savimbi.

En el frente interno, es evidente que la intención de Castro de crear una revolución permanente al estilo stalinista, está fracasando. La economía continúa su titubeante paso a medida que se queda cada vez más rezagada. A diferencia de las otras economías controladas del Este, el líder de Cuba evita cualquier indicio de reforma verdadera. En Cuba están estrictamente limitadas las discusiones sobre la *perestroika*, por no hablar de la *glasnot*.

Pero en Cuba crece la oposición interna, oposición alimentada por Radio Martí, la cual ha resquebrajado con éxito el monopolio de Castro sobre la información y la propaganda. Según afirman los desertores, los militares se muestran cada vez más intranquilos como resultado de las bajas sufridas en Angola. Activistas por los derechos humanos que antes eran totalmente desconocidos han logrado en estos momentos despertar el interés internacional por primera vez, en lo referente a los deplorables antecedentes del régimen en ese frente.

En resumen, el régimen está cada vez más a la defensiva y el costo de sus aventuras en el extranjero continúa aumentando, sin que se vislumbre ningún beneficio patente para el pueblo cubano. El futuro bajo el gobierno de Castro, según él mismo ha admitido, es igualmente sombrío, a pesar de la confianza en nuevas artimañas como las micro brigadas y una renovada y polémica guerra contra la burocracia.

El absoluto fracaso de Castro, que sólo ahora se comprende vagamente fuera de Cuba, es el hecho fundamental y sobresaliente que la próxima Administración debe enfrentar en la formación de un nuevo enfoque a la hora de tratar esa esencial isla.

Con la muy real posibilidad de la desaparición de Castro en algún momento de la década de 1990, los estrategas políticos norteamericanos deben estar conscientes de que se está gestando una crisis del régimen. Es muy poco probable que el sistema actual, sin caudillo, pueda sobrevivir durante largo tiempo sin una masiva intervención soviética para imponer un títere de su propia elección, al estilo de Afganistán. Pero Cuba no es Afganistán. Cuba está en nuestra esfera de intereses, no en la de Moscú. Eso debe aclararse con energía en los primeros momentos de la próxima Administración.

Al mismo tiempo, la próxima Administración puede ayudar a preparar el terreno para un rápido y positivo cambio en Cuba después de la desaparición del máximo líder. EEUU debe prepararse para conversar con los principales poseedores del poder,

especialmente las Fuerzas Armadas cubanas que han pagado con lealtad un alto precio por las ambiciones globales de Castro.

Por lo tanto, previendo la inevitable y cercana crisis del régimen cubano, la próxima Administración debe reconsiderar todo su enfoque respecto a la alianza soviético-cubana. La nueva Administración debe tomar la iniciativa en cuanto al futuro del régimen cubano. Es vital que se inicien conversaciones de largo alcance mientras Castro aún mantenga el control. EEUU debe indicar su deseo de normalizar rápidamente las relaciones con una cuba desovietizada -una normalización que incluya la suspensión del embargo comercial. Las conversaciones serían incondicionales, directas y de alto nivel, sin la ayuda de intermediarios cuestionables.

El objetivo es restituir a Cuba como un miembro libre e independiente de la comunidad internacional y, en particular, del Hemisferio Occidental, para que la guerra de treinta años entre cubanos y norteamericanos finalmente concluya.

PANAMÁ

Propuesta N° 10

La expulsión de Noriega y la celebración de elecciones no serán suficientes para instaurar un régimen democrático en Panamá. EEUU tendrá que centrar su atención en toda la gama de problemas que entraña un régimen democrático: la reforma de las Fuerzas de Defensa Panameñas, el apoyo a un sistema judicial independiente y la restauración de la economía serán los más esenciales.

La crisis del régimen de Panamá se produce ahora. Durante veinte años, la exhuberancia democrática natural y algo desorganizada del país fue ahogada por una dictadura seudo populista.

La Administración de Carter cifró sus esperanzas en forjar una alianza con un gobierno corrupto, que creía estable, mediante la firma de dos tratados sobre el Canal de Panamá, que garantizaran el control por ese país de esa vital vía interoceánica para finales de siglo.

Ya en este momento la ilusión de Carter es evidente para todos. Sin embargo, la Administración de Reagan sólo ha podido formular una nueva política hacia Panamá a tontas y a locas, centrada casi exclusivamente en despojar el país de un individuo, su influyente general Manuel Antonio Noriega.

Pero el derrocamiento del dictador difícilmente resuelva los problemas de Panamá o cree condiciones para una sólida asociación norteamericano-panameña.

En la década de 1990, la próxima Administración tendrá que enfrentar serios problemas que aún están por aflorar. Las leyes bancarias tienen que ser revisadas para evitar que el país se hunda una vez más en la corrupción basada en el cartel de las drogas. La Constitución panameña debe ser enmendada para que permita la extradición de ciudadanos panameños culpables de delitos en terceros países, aunque sería preferible en gran medida, que esta tarea fuera asumida por un sistema judicial panameño depurado.

Además de eso, EEUU y Panamá, una vez que esté en el poder un gobierno democrático, deben comenzar a planear seriamente la adecuada administración del Canal, que pronto requerirá una importante y costosa reparación general. Al mismo

tiempo, deben iniciarse las discusiones sobre una defensa realista del Canal después del año 2000. Esas conversaciones deben incluir la retención por EEUU de un número limitado de instalaciones en Panamá (principalmente la base aérea Howard y la estación naval Rodman) para una adecuada proyección de fuerza en todo el Hemisferio Occidental.

Estas cuestiones no han sido tratadas y deben serlo para principios de la década de 1990, si se han de afianzar los intereses nacionales de Panamá y EEUU para el próximo siglo.

DECLARACIÓN RESUMEN

EEUU y el sistema interamericano se enfrentan a enormes problemas en América Latina. La crisis de Centroamérica continúa sin resolverse y turbulentas corrientes que se encuentran en acción en América del Sur están siendo pasadas por alto a riesgo nuestro. La deuda, el terrorismo, las drogas, los Estados depredadores, las enormes migraciones, las insurgencias comunistas y la corrupción, son sólo parte de este escenario. El documento Santa Fe II es una estrategia para atacar estos problemas y promover la democracia, la libertad y la oportunidad económica para toda la región en una forma pro-activa en lugar de reactiva.

Cuando el gobierno de Reagan tomó el poder, América Latina y la política exterior de EEUU hacia ese continente se reflejaban mutuamente: ambas estaban en completo desorden. El documento Santa Fe I que se publicó en 1980, fue concebido para abordar algunos de los problemas más inmediatos que enfrenta EEUU. El mismo ayudó a concentrar la percepción norteamericana de cómo debía verse a América Latina en un contexto geo-estratégico; advirtió la crisis de endeudamiento que se vislumbraba, estimuló los esfuerzos en pro de la democracia y el surgimiento de programas tales como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y Radio Martí.

Pero no todas las propuestas del documento Santa Fe I fueron aplicadas adecuadamente, ni todos los problemas pudieron resolverse en sólo ocho años, por lo que el documento Santa Fe II además de seguir el sello innovador de su predecesor, también es un producto de la necesidad. Como ocurrió hace ocho años, el sistema interamericano, especialmente la OEA, permanece subutilizado y, de hecho, ha sido testigo de un mayor deterioro en los últimos años. Por tanto, los autores del documento Santa Fe II, trataron de proporcionar una estrategia de régimen que vaya más allá del establecimiento de un sistema electoral, y que, si es seguida por la próxima Administración, pueda proporcionar estabilidad a situaciones políticas que de otra forma pudieran ser explosivas e inestables. Especialmente esto significará apuntalar a organizaciones independientes dentro de las sociedades latinoamericanas, educar a las personas y enfrentar fuerzas marxistas y otras fuerzas políticas y culturales estadistas.

El documento de la Declaración de Santa Fe II centra particularmente su atención en la economía, con el argumento de que la democracia necesita un grado de racionalidad política en la esfera económica. Los sistemas socialistas dirigidos de forma centralizada no producen ni igualdad ni riqueza. No basta con proponer planes para que las naciones deudoras paguen el interés de sus deudas; se tienen que trazar estrategias que les permitan salir del ciclo de endeudamiento y generar ahorros y crecimiento reales. Se condenan el estatismo, los aparatos burocráticos gigantescos y la nacionalización, al tiempo que se estimulan la formación de mercados de capital nacionales, la supresión de regulaciones y la privatización de compañías para estatales existentes. Además de defender los valores de la empresa privada en oposición al capitalismo de Estado, los autores también proponen medidas que van desde la prolongación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe hasta la preservación de los bosques tropicales.

Los problemas del terrorismo, los insurgentes, las drogas y la emigración/ inmigración son identificados como factores desestabilizadores que contribuyen al carácter volátil y a la falta de seguridad de los regímenes democráticos latinoamericanos, y que también a nosotros nos afectan en mayor o menor medida en nuestro país. La red de terrorismo se extiende desde Chiapas, en México, hasta el sur de Los Andes, en Chile. El pasado año, los norteamericanos emplearon más dinero importando drogas ilegales

desde América Latina que en alimentos; evidentemente, estos son problemas que no desaparecerán. Para comenzar a resolverlos, los estrategas políticos norteamericanos tienen que reconocer la crisis que enfrentan y estar preparados para adoptar medidas especiales. Sin embargo sus primeros pasos deben estar dirigidos a fortalecer la capacidad normal -y legal- de los sistemas judiciales que tienen que llevar el peso de la tarea.

La última sección analiza los problemas y las oportunidades que enfrentarán algunos países latinoamericanos especialmente importantes. México, Colombia, Brasil, Cuba y Panamá son examinados por separado por las cuestiones específicas que los estrategas políticos norteamericanos tendrán que enfrentar a la hora de formular respuestas para sus turbulentas políticas. La crisis existente en América Latina no ha sido resuelta; los problemas han cambiado, pero son tan graves, o peores que en 1980. Hemos sido testigos de una falta de comunicación y una persistente confusión, y esto tiene que terminar. Los estrategas políticos de EEUU tienen la obligación de informar al pueblo lo que ocurre -los formuladores de decisiones tienen que ser claros y específicos en lo referente a cuáles son los problemas que enfrenta EEUU y qué se propone hacer para resolverlos. El documento Santa Fe II es una guía para el camino que han de transitar.

SOBRE LOS AUTORES

El Sr. L. Francis (Lynn) Bouchey, es el presidente del Consejo de Seguridad Interamericana. Ha impartido Política Latinoamericana en la Universidad Católica de EEUU y es un investigador asociado del Instituto de Estudios Interamericanos de la Universidad de Miami. Es comentarista regular de Radio América sobre problemas latinoamericanos y ha publicado numerosos trabajos sobre asuntos estratégicos relacionados con América Latina. Es candidato a doctor en la Universidad Católica. Obtuvo su MA en la Universidad de Georgetown y su BA en la Universidad de Dallas.

El Dr. Roger W. Fontaine, es actualmente un escritor por cuenta propia de Washington. Ha sido jefe de la corresponsalía diplomática de *The Washington Times*. Ha sido asesor especial del personal del Consejo de Seguridad Nacional para América Latina y fungió como director del programa de Estudios Latinoamericanos en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de la Universidad de Georgetown. Ha ocupado diferentes cargos docentes e investigativos. Posee una vasta experiencia en radio y televisión y ha escrito numerosos libros y monografías sobre América Latina. Obtuvo su Ph. D. y su MA en la Universidad John Hopkins y un BA en la Universidad de Valparaíso.

El Dr. David C. Jordan imparte clases actualmente en la Universidad de Virginia. Fue embajador de EEUU en Perú, consultor del gobierno y de empresas privadas de EEUU y forma parte de la junta editorial de Strategic Review y Comparative Strategy. También fue presidente del Departamento Woodrow Wilson de Relaciones Exteriores y del Gobierno durante ocho años. Ha publicado numerosos trabajos sobre América Latina y las cuestiones estratégicas. Obtuvo su Ph. D. en la Universidad de Pennsylvania, el LI.B. en la Universidad de Virginia y su BA en Harvard.

El Tte. Gral. Gordon Summer, hijo (USA-Ret), es presidente del Consejo de Seguridad Interamericana y fue nombrado embajador especial por la Administración Reagan. Ha servido en Vietnam, ha sido asignado al secretario de Defensa como auxiliar Militar Superior y al Estado Mayor Conjunto como jefe, en la División del Hemisferio Occidental, director de Planes y Políticas. En agosto de 1975 fue promovido a Tte. Gral. y fungió como presidente de la Junta Interamericana de Defensa. Ha sido condecorado con las medallas Estrella de Plata, Estrella de Bronce "V". Emblema (con 13 Oak Leaf Clusters)* y Purple Heart** entre otros. El Gral. Summer obtuvo un BA en la Universidad Estatal de Louisiana, un MA en la Universidad de Maryland y ha concluido un trabajo de curso para un grado de doctor en la Universidad Americana.

Notas

MA Master of Arts. Licenciado en Letras

BA Bachelor of Arts. Licenciado en Artes

PhD Doctor of Philosophy. Doctor en Filosofía

LI.B Bachelor of Laws. Doctor en Derecho

Observación

No hay equivalencia exacta entre los títulos otorgados por las universidades de lengua española y los de Gran Bretaña o EEUU. El grado de Master se encuentra entre el de licenciado y el de doctor.

* Guirnalda de bronce o plata (que imita las hojas y bellotas de roble) que se añade a una condecoración militar.

** Condecoración concedida a los miembros de las Fuerzas Armadas heridos en combate.

Notas aclaratorias

1. *A new Inter-American Policy for the Eighties*, Comité de Santa Fe, L. Francis Boucher, Roger Fontaine, David Jordan, Gordon Summer y Lewis Tambs, editor.
2. Por ejemplo, el Congreso no apoyó o brindó una alternativa para la Iniciativa de Cuenca del Caribe (una demora de dos años y medio), Radio Martí (tres años), financiamiento para El Salvador (aproximadamente tres años) y todavía en el momento en que se redactó este documento no tiene una política bipartidaria sobre Panamá.
3. Algunos ejemplos notables lo constituyen México y Perú donde responden a desastres económicos inducidos por el régimen mediante la toma de sus sistemas bancarios privados, con lo cual agravan la situación posteriormente.
4. LP 480: en virtud de la Ley Pública 480, los gobiernos beneficiarios reciben moneda local por la venta de productos agrícolas norteamericanos excedentes.

*Ancien regime: Sistema Político y social de Francia antes de la Revolución de 1789 (Nota del traductor).

* Macadamia: fruta parecida a la avellana que se obtiene de un árbol australiano.